



Demandante: Janier Jadith Tirado Solera  
Demandados: Concejales de Montería para el período 2024-2027  
Rad: 23001-23-33-000-2023-00182-01

**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN QUINTA**

**MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ**

**Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)**

**Referencia:** NULIDAD ELECTORAL  
**Radicación:** 23001-23-33-000-2023-00182-01  
**Demandante:** JANIER JADITH TIRADO SOLERA  
**Demandado:** CONCEJALES DE MONTERÍA PARA EL PERÍODO 2024-2027

**Tema:** Extemporaneidad de documentos electorales.

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia del 12 de agosto de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, denegó las pretensiones de la demanda.

**I. ANTECEDENTES**

**1.1. La demanda**

1. El señor Janier Jadith Tirado Solera, actuando en nombre propio y, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda contra el acto de elección de los concejales de Montería para el período 2024-2027, con las siguientes pretensiones:

1. Declarar **la nulidad parcial** del formulario E-26-CON expedido el 12 de noviembre de 2023 por la Comisión Escrutadora General de Montería, Córdoba, mediante el cual declaró la elección de los Concejales de esta ciudad para el período 2024-2027, en cuanto para su expedición se incluyeron los documentos y resultados electorales de las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba” del municipio de Montería.

2. De igual manera, declarar la nulidad que como actos preparatorios están incluidos en las resoluciones números 6 del 6 de noviembre; 8 del 7 de noviembre; 25 del 8 de noviembre y, 39 del 12 de noviembre de 2023 expedidas por la Comisión Escrutadora Auxiliar, Municipal y General que resolvieron las reclamaciones y recursos.



3. Como consecuencia, y, con fundamento en el artículo 288 numeral 2º y, parágrafo del CPACA, cancelar la credencial del Concejal electo **Elkin Darío Ávila De Ávila** y, ordenar un nuevo escrutinio con la exclusión de los registros electorales (actas) de las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba” del municipio de Montería, y, declarar elegido a **Janier Jadith Tirado Solera** expidiéndole una nueva credencial como Concejal por el Partido Liberal para el período 2024-2027 (Negrilla del texto original)

1.2. Hechos

2. La parte actora señaló que, mediante Resolución 28229 del 14 de octubre de 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario para las elecciones de autoridades territoriales que se realizarían el 29 de octubre de 2023.
3. Indicó que el partido Liberal Colombiano inscribió la siguiente lista de candidatos al Concejo Municipal de Montería:

| Código | Nombre                           |
|--------|----------------------------------|
| 01     | Pedro Pablo Pérez Rojas          |
| 02     | Jainer Jadith Tirado Solera      |
| 03     | Aglae Dinora Caraballo Mercado   |
| 04     | Elkin Darío Ávila de Ávila       |
| 05     | José Darío Riascos Callejas      |
| 06     | Tatiana Mided Guerra Salgado     |
| 07     | Guillermo José Corrales Vergara  |
| 08     | Óscar Ney Paternina Mestra       |
| 09     | Ricardo León Lacharme Méndez     |
| 010    | Duván Yesid Sánchez Martínez     |
| 011    | Rafael Arturo Madrid Orozco      |
| 012    | Loraine Alexandra Flórez Cantero |
| 013    | Yanid Arias Ceballos             |
| 014    | Yenny Patricia Rentería Negrete  |
| 015    | Ramiro Enrique Avilez Mercado    |
| 016    | Devier Acosta Pimienta           |
| 017    | Yurany Andrea Morelo Argumedo    |
| 018    | Pablo César Villadiego Brun      |
| 019    | Jader Eduardo Solano Flórez      |

4. Resaltó que ocupó el segundo lugar de la anterior lista, por lo que le correspondió el número 2 en la tarjeta electoral.
5. Señaló que, a través de la Resolución 24842 del 25 de octubre de 2023, la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó los términos para la entrega de los documentos electorales el día de las elecciones para el departamento de Córdoba.



6. Añadió que en ese acto administrativo se dispuso, para el puesto de votación denominado «Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba» de Montería, que el plazo para la entrega de esos documentos sería hasta las 9:00 am del 30 de octubre de 2023.
7. Preciso que en ese puesto se instalaron y funcionaron las mesas 1, 2, 3 y 4, pero el término anterior fue desconocido ya que los documentos se entregaron a las 12:00 pm del 30 de octubre de 2023.
8. Advirtió que los jurados de votación debían entregarlos a las 9:00 am en los sobres 7 y 8, debidamente sellados y haciendo referencia a la fecha, hora y nombre de quien entregaba; no obstante, aseguró que se diligenciaron de forma extemporánea dos clases de formularios E-17 con información que no coincidía.
9. Explicó que los formularios de las mesas 1, 2 y 3 fueron diligenciados a mano por el delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, indicando que fueron recibidos a las 11:57 am, 9:46 am y 9:40 am del 30 de octubre de 2023, respectivamente.
10. Sostuvo que no le fue posible obtener el formulario E-17 de la mesa 4, pero aseguró que la hora de entrega debía estar entre las 9:40 y las 9:46 am de ese día.
11. Refirió que en ninguna de esas mesas se dejó constancia alguna sobre inconvenientes en la entrega de los documentos electorales, pues en la casilla correspondiente se aprecia la anotación «sin observaciones».
12. Adujo que existían otros formularios E-17 que fueron diligenciados electrónicamente, en los que se plasmó la siguiente información:

**RECIBO DE DOCUMENTOS ELECTORALES ENTREGADOS POR LOS JURADOS DE VOTACIÓN - ELECCIONES TERRITORIALES 29 DE OCTUBRE DE 2023 (...)**

Zona 99, puesto 55, Mesa 1: EL DÍA 30 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A LAS 12.19 a.m. RECIBÍ DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN EL SOBRE QUE DICE CONTENER LAS ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SIVIERON (sic) PARA LA VOTACIÓN". "Observaciones: Sin observaciones.

Zona 99, puesto 55, Mesa 2: EL DÍA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A LAS 10.22.22 p.m. RECIBÍ DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN EL SOBRE QUE DICE CONTENER LAS ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SIVIERON (sic) PARA LA VOTACIÓN". "Observaciones: Sin observaciones.

Zona 99, puesto 55, Mesa 3: EL DÍA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A LAS 10.16 p.m. RECIBÍ DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN EL SOBRE QUE DICE CONTENER LAS ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SIVIERON (sic) PARA LA VOTACIÓN". "Observaciones: Sin observaciones.

Zona 99, puesto 55, Mesa 4: EL DÍA 29 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A LAS 10.17.22 p.m. RECIBÍ DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN EL SOBRE QUE



Demandante: Janier Jadith Tirado Solera  
Demandados: Concejales de Montería para el período 2024-2027  
Rad: 23001-23-33-000-2023-00182-01

DICE CONTENER LAS ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES QUE SIVIERON (sic) PARA LA VOTACIÓN". "Observaciones: Sin observaciones.

13. Alegó que los funcionarios de la registraduría que recibieron los documentos en esas mesas dejaron esas constancias en el formulario E-17 y no en el E-19, que era el dispuesto para el efecto.

14. Cuestionó que en los formularios E-17 diligenciados a mano se haya consignado que los documentos se recibieron el 30 de octubre de 2023, pero en los electrónicos se haya indicado que la entrega fue el 29 de octubre del mismo año, por lo que consideró que se podría tratar de una falsedad.

15. Expresó que si los documentos de las mesas 1, 2, 3 y 4 pertenecen a un mismo puesto de votación, es obvio que son transportados conjuntamente por las fuerzas armadas al sitio donde serían recibidos, así que no se entiende la diferencia horaria que existió con la primera mesa.

16. Sostuvo que los funcionarios que recibieron el material electoral nunca dejaron constancia de alguna situación que impidiera la entrega oportuna, como sería el caso de sabotaje, violencia o cualquier circunstancia anómala durante el trayecto que pudieran ser calificadas como fuerza mayor o caso fortuito.

17. Refirió que a las 12:00 pm del 30 de octubre de 2023, el registrador José Jair Castaño Bedoya hizo público en las instalaciones del Centro de Convenciones de Montería que en ese momento recibía los documentos electorales de las mesas en cuestión, hecho que fue grabado por el ciudadano Antony Alexander Ignacio Manuel Olarte Cordero y cuyo video y declaración juramentada hacen parte de la demanda.

18. Añadió que el 7 de noviembre de 2023, los registradores José Jair Castaño Bedoya y Norma Peralta Serrano emitieron una certificación en la que indicaron que los pliegos electorales llegaron custodiados por la Policía Nacional al centro de convenciones entre la 1:00 am y las 3:00 am del 30 de octubre de ese año, esto es, cuando las comisiones escrutadoras ya estaban cerradas, por lo que se configuraba una circunstancia de fuerza mayor y caso fortuito.

19. Aseguró que, lo anterior, confirmaba que los formularios E-17 elaborados a mano y electrónicamente fueron diligenciados con posterioridad para intentar sanear la irregularidad.

20. Además, consideró que esta certificación no coincidía con la manifestación realizada por el señor Castaño Bedoya en el video antes mencionado.

21. Expuso que, si el jurado de votación llegó al centro de convenciones con los documentos y no los pudo entregar, ¿dónde los dejó y en poder de quién? ¿por qué no se dejó constancia ni se hizo firmar a los miembros de la Policía Nacional que custodiaban el lugar? ¿de qué parte los extrajo el registrador cuando se dirigió al



público en la mañana del 30 de octubre de 2023?

22. Insistió en que las anomalías que pudieron haber afectado la entrega oportuna debieron quedar consignadas en los mismos documentos electorales en la hora que se presentaron, mas no posteriormente.

23. Informó que el 6 de noviembre de 2023 presentó una reclamación pidiendo que se excluyeran los registros de esas mesas, pero la Comisión Escrutadora Auxiliar 19, mediante la Resolución 6 de misma fecha, la rechazó y luego se emitió la certificación del 7 de noviembre antes reseñada.

24. Agregó que mediante Resoluciones 8 y 25 del 7 y 8 de noviembre de 2023, respectivamente, la Comisión Escrutadora Municipal resolvió negativamente las reclamaciones en las que había reiterado la irregularidad, decisiones que fueron confirmadas por la Comisión Escrutadora General a través de la Resolución 39 del 12 de noviembre del mismo año.

25. Manifestó que el candidato Elkin Darío Ávila de Ávila fue elegido concejal de Montería con 3160 votos, mientras que él obtuvo 3098 y no resultó elegido.

26. Alegó que, si se excluyen los registros de esas mesas, el señor Ávila de Ávila obtendría 3075 votos y él terminaría con 3079, por lo que cambiaría el resultado final y debería ser declarada su elección como concejal de ese municipio.

### **1.3. Normas violadas y concepto de la violación**

27. La parte demandante alegó como desconocidos los artículos 2, 13, 29 y 40 de la Constitución Política; 275, numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 144 y 152 del Código Electoral; y 1° de la Resolución 24842 del 25 de octubre de 2023 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

28. Sobre el particular, señaló que los documentos electorales de las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba) fueron entregados fuera del horario establecido en dicha resolución que era las 9:00 am del 30 de octubre de 2023.

29. Reiteró que en los formularios E-17 elaborados a mano se plasmó que fueron entregados a las 11:57 am, 9:40 am y 9:46 am, es decir, luego de vencido el término previsto.

30. Agregó que aunque se intentó corregir irregularmente esa situación con la expedición de formularios E-17 digitales, lo cierto es que en ninguno se dejó constancia del impedimento que pudo ocasionar el retardo.

31. Expresó que la certificación expedida el 7 de noviembre siguiente por los



registradores es extemporánea y, en todo caso, las razones de la demora que allí se invocaron no constituyen violencia, fuerza mayor o caso fortuito.

32. Aseguró que tal irregularidad desconoce el debido proceso y constituye una causal de nulidad en los términos del numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

33. Aclaró que, aunque no toda anomalía tiene la potencialidad de generar la anulación del acto demandado, lo cierto es que al excluir los registros de esas mesas sí cambiaría el resultado de la elección, por lo que se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

#### **1.4. Contestación de la demanda**

##### **1.4.1. Elkin Darío Ávila de Ávila**

34. Por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones del medio de control.

35. Analizó los distintos tipos de documentos que se diligencian durante los comicios, las funciones de los claveros y las figuras de violencia y sabotaje como causales de nulidad electoral.

36. Manifestó que el demandante no demostró que en la diligencia de recuento se evidenciara la pérdida o destrucción del material electoral y que, en consecuencia, hubiera sido imposible verificar el resultado de la elección; por el contrario, aclaró que hubo reclamación y se realizó el recuento de las cuatro mesas, como se puede apreciar en el acta de escrutinio zonal 19.

37. Advirtió que el demandante presentó la solicitud de recuento hasta el 7 de noviembre de 2023, pero las mesas ya habían sido escrutadas desde el 3 y 4 del mismo mes, es decir, cuando ya había operado el principio de preclusión, lo cual le fue explicado por las comisiones zonal y municipal de Montería en las resoluciones pertinentes.

38. Señaló que el material electoral de las mesas bajo controversia nunca perdió su cadena de custodia ni existe prueba de su manipulación o modificación.

39. Recalcó que los resultados fueron ingresados en debida forma en los formularios respectivos sin que esté demostrado algún tipo de alteración.

40. Destacó que los pliegos fueron entregados al funcionario competente de la Registraduría Nacional del Estado Civil para su posterior escrutinio, de lo cual da cuenta el Formulario E-17 al dejar constancia sobre el recibo de todos y cada uno de los sobres respectivos dentro del plazo previsto para el efecto.





41. Comentó que aportó una votación importante en esa zona, por lo que debe prevalecer el deseo del constituyente primario y respetarse la voluntad del elector, como desarrollo del principio de eficacia y supremacía del voto.

#### **1.4.2. Álvaro Daniel Cabrales Vergara y Trino Hoyos Piñeres**

42. Por conducto del mismo apoderado, radicaron un escrito de contestación similar al anterior en el que se opusieron a las pretensiones de la demanda.

43. Aclararon que fueron elegidos concejales con una votación importante en todo Montería, por lo que de llegarse a sustraer los sufragios obtenidos en las mesas invocadas por el demandante no se afectaría su elección.

44. Con todo, recalcaron que el material electoral no perdió su cadena de custodia ni se demostró algún tipo de manipulación o alteración.

#### **1.4.3. John Edisson Hoyos Duque, Gian Xavier Berrío Cárcamo, Nacor David Díaz, Jader Luis Garay Mestra, Miguel Andrés García Ramos, Julio César Hoyos Zapata, Moisés Adiel Licona Salgado, Anyi Pacheco López Daniel Francisco Payares Hernández, Juan David Rangel Yanez, Duván Yesid Sánchez Martínez, Jader Eduardo Solano Flórez, Carmelo José Tobías Cogollo, Juan Vicente Vargas Buelvas, Carlos Andrés Verbel Espitia y Pablo Cesar Villadiego Brun**

45. A través de apoderado, los demás concejales de Montería pidieron negar las pretensiones del medio de control.

46. Plantearon la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales e indebida acumulación de pretensiones, al considerar que los hechos planteados eran insuficientes en cuanto a su ilustración y correspondían a conjeturas o preguntas que no llevaban al operador jurídico a un discernimiento claro de la controversia.

47. Así mismo, invocaron la excepción de legalidad del acto administrativo, al considerar que el Formulario E-26 CON del 12 de noviembre de 2023, que declaró la elección de los concejales de Montería para el período 2024-2027, no adolece de defecto alguno, por lo que los argumentos del demandante no tienen vocación de prosperidad.

48. Además, consideraron que carecen de legitimación en la causa por pasiva, ya que en la demanda se alegan ciertas irregularidades en los escrutinios y que terminaron con la elección del señor Elkin Darío Ávila de Ávila con 3160 votos, y no del señor Janier Jadith Tirado Solera con 3098 votos.

#### **1.4.4. Registraduría Nacional del Estado Civil**



49. El apoderado de la entidad planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no está facultada para proferir actos administrativos durante el desarrollo de los escrutinios municipales y departamentales.

50. Explicó que se encarga exclusivamente de la organización de las elecciones, por lo que sus funciones son de preparación y desarrollo de los comicios.

51. Por lo anterior, aseguró que en los hechos de la demanda no se observa alguna acción u omisión por parte de la institución que amerite su vinculación en el presente asunto.

52. Con todo, informó que los escrutinios de la ciudad de Montería iniciaron a las 4:00 pm del 29 de octubre de 2023, pero los pliegos electorales de las cuatro mesas instaladas en el corregimiento Boca de la Ceiba fueron entregados por la delegada al registrador auxiliar luego de las 12:00 am del 30 de octubre siguiente, es decir, en horas de la madrugada.

53. Preciso que el material no fue introducido en el arca triclave de la comisión 19 porque no se encontraban en el Centro de Convenciones de Montería todos los integrantes de esa comisión, pues solo estaba presente el señor Dairo Covo quien fungía como clavero y como secretario.

54. Añadió que, para salvaguardar los pliegos, el señor Dairo Covo, en presencia de los registradores especiales Norma Constanza Peralta y José Jair Cataño Bedoya, verificó la entrada y buen estado de las bolsas de las cuatro mesas y los introdujo en un arca triclave auxiliar, ya que era materialmente imposible introducirlos en el que había sido destinado inicialmente porque no se encontraban los otros dos miembros de la comisión 19.

55. Aseguró que también estuvieron presentes la señora Someya Farah como administradora del centro de convenciones y un gran número de agentes de la Policía Nacional, de los que se destacan los patrulleros Eduardo Luis Pereira Barrera y Rafael Antonio Benítez Negrete.

56. Destacó que el material electoral siempre estuvo custodiado por la fuerza pública, así que nunca fue manipulado ni modificado por personas ajenas al proceso.

57. Refirió que, al iniciar los escrutinios municipales y auxiliares a la mañana siguiente, los registradores se comunicaron con la procuradora provincial Luz Ángela Ovalle, con el coronel de la Policía Nacional Gimy Palacio, con el procurador regional Javier Sandoval y con el representante de la Misión de Observación Electoral Ismael Rivera, a quienes se les informó la novedad presentada la noche anterior y se les solicitó su acompañamiento para el retiro de los pliegos electorales del arca triclave auxiliar en el que se encontraban custodiados los de esas cuatro





mesas.

58. Afirmó que esta situación fue debidamente informada a estas autoridades para que verificaran que el material permanecía en el arca debidamente cerrada y custodiada por miembros de la fuerza pública y, de este modo, seguir brindando las garantías y la respectiva transparencia a los candidatos, movimientos, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos.

59. Resaltó que el procedimiento se realizó aproximadamente a las 11:00 am del 30 de octubre de 2023 con la presencia de los ciudadanos ya mencionados, momento para el cual se le informó a todos los presentes en la audiencia pública de escrutinio el traslado de los pliegos del arca auxiliar al arca de la comisión 19.

60. Con base en lo anterior, argumentó que no se alteraron los documentos y, contrario a ello, se brindó la debida transparencia y se garantizó la eficacia del voto, así como la expresión libre de la voluntad popular.

61. Por otra parte, aclaró que no existió necesidad de realizar observaciones en el Formulario E-17 diligenciado por el delegado de puesto de la registraduría, porque en ese momento los pliegos fueron entregados sin inconvenientes por parte de los jurados de votación de las mesas respectivas.

62. Expresó que no existían dos formularios E-17 distintos y señaló que, cuando se presenta una novedad en el registro electrónico de la información, la entidad tiene como plan de contingencia un formulario genérico y manual que permite diligenciar hasta 10 mesas por documento.

63. Añadió que, como el puesto de votación Boca de la Ceiba estaba ubicado en zona rural, al delegado de puesto no le fue posible cargar la información en tiempo real por problemas de conectividad en la vereda, lo que hizo que se activara el plan de contingencia y, por eso, los formularios E-17 manuales se diligenciaron cuando el jurado de votación que fungió como presidente de la mesa entregó al delegado de puesto el sobre de claveros debidamente sellado el mismo día de la elección.

64. Indicó que, en tal sentido, los formularios E-17 electrónicos se diligenciaron posteriormente debido a la necesidad de culminar el procesamiento de la información en la aplicación «Monitoreo de Puestos» y, así, cerrar definitivamente el puesto de votación respectivo.

65. Finalmente, aseguró que los pliegos de las cuatro mesas fueron transportados y custodiados conjuntamente por la delegada del puesto Zaida Luz Moreno Gélix y la fuerza pública hasta el Centro de Convenciones de Montería, lugar al que arribaron aproximadamente a las 12:50 am, es decir, en la madrugada del 30 de octubre de 2023.

66. Informó que el demandante presentó una reclamación el 6 de noviembre de



2023 ante la comisión auxiliar 19 con el fin de que se excluyeran los registros de las mesas bajo controversia, la cual fue rechazada mediante Resolución 6 de la misma fecha por extemporánea.

67. Al respecto, adujo que el escrutinio se había realizado el 3 y 4 de noviembre de 2023, por lo que para el momento de la reclamación ya había operado el fenómeno de preclusividad.

68. En relación con la solicitud de saneamiento presentada por el actor, advirtió que tenía como fundamento un presunto sabotaje por agentes externos, quienes incluyeron datos contrarios a la verdad en los documentos electorales para alterar el resultado de las votaciones.

69. Mencionó que la Comisión Municipal de Montería, mediante Resolución 25 del 8 de noviembre de 2023, rechazó esta última solicitud luego de verificar que entre el Formulario E-14 Claveros y E-14 de Transmisión no existía diferencia alguna; además, recalcó que la comisión zonal sí evidenció unas anomalías en el conteo de los votos por errores aritméticos, por lo que realizó un recuento oficioso para garantizar la transparencia en los comicios, situación que fue registrada en el acta general de escrutinio correspondiente.

#### **1.4.5. Consejo Nacional Electoral**

70. La profesional universitaria adscrita a la Oficina Jurídica de la entidad analizó la información consignada en los formularios E-17 manuales y digitales y aseguró que no existía algún tipo de irregularidad.

71. Aseguró que, al estudiar tales documentos, se puede concluir que su entrega fue realizada dentro de los términos y horas establecidos, por lo que gozan de plena legalidad y no hay lugar a su exclusión.

72. Sostuvo que las resoluciones 6, 8, 25 y 39 de 2023, expedidas por las comisiones escrutadoras correspondientes, fueron debidamente motivadas y tuvieron en cuenta el material probatorio existente.

73. Por lo anterior, pidió desestimar las pretensiones de la demanda.

#### **1.4.6. Concejo Municipal de Montería**

74. Mediante apoderado, aclaró que la demora en la entrega de los pliegos no constituye una causal de nulidad del acto de elección sino una causal de reclamación, en los términos del artículo 192 del Código Electoral.

75. Manifestó que este tipo de reclamaciones deben respetar el principio de preclusividad, lo cual no ocurrió en el caso del demandante ya que no lo hizo de manera oportuna y, por eso, todas las que presentó fueron rechazadas por



extemporáneas.

76. Preciso que la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se configura por una falsedad ideológica (inconsistencias graves entre los distintos formularios) o por una falsedad material (modificaciones sobre los documentos que contengan información falsa), circunstancias que no se demostraron en el presente asunto.

77. Aseguró que, por el contrario, en todo momento se garantizó la cadena de custodia del material electoral y se encontraba en perfectas condiciones.

78. Manifestó que no están dados los supuestos para declarar la nulidad del acto de elección demandado y, aunque se pudieron presentar errores durante el proceso electoral, estos no tienen la entidad jurídica suficiente para desvirtuar la voluntad popular de los ciudadanos del municipio.

79. En tal sentido, pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda.

#### **1.4.7. Tercera impugnadora**

80. La señora Diana Luz Murillo Prioló solicitó ser tenida como impugnadora en el presente asunto y adujo que el acto de elección de los concejales de Montería está ajustado a derecho porque: (i) operó la preclusividad durante los escrutinios, (ii) no hay razones jurídicas para solicitar la exclusión de las mesas invocadas, (iii) no se integró el acto demandado con los actos preparatorios, (iv) no se configuró la causal de nulidad invocada, (v) no se cumplió la carga probatoria necesaria, (vi) se respetaron los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima, debido proceso e igualdad, y (vi) el acto electoral salvaguarda el principio de eficacia del voto.

81. Agregó que los pliegos llegaron al lugar de los escrutinios dentro de los términos establecidos pero el único miembro de la comisión escrutadora que se encontraba presente era el señor Dairo Covo, quien verificó la entrada y el buen estado de las bolsas que contenían el material electoral, así que no existía irregularidad alguna que generara la anulación del acto de elección.

#### **1.5. Actuación procesal de primera instancia**

82. Mediante auto del 18 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda y ordenó notificar a los concejales electos de Montería para el período 2024-2027 en condición de demandados, así como a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público.

83. El 18 de enero de 2024 se corrigió la anterior actuación en relación con el



nombre del apoderado de la parte actora y se ordenó informar del proceso al presidente del Concejo Municipal de Montería.

84. A través de providencia del 24 de abril siguiente se declararon no probadas las excepciones de «inepta demanda» e «ineptitud por falta de requisitos formales» propuestas por los concejales demandados.

85. El 28 de mayo del mismo año se reconoció a la señora Diana Luz Murillo Priló como tercera impugnadora y se fijó el 6 de junio de 2024 como fecha para la realización de la audiencia inicial, diligencia en la que se decretaron y negaron algunas pruebas y se fijó el litigio en los siguientes términos:

Determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección de los demandados como concejales del Municipio de Montería elegidos para el periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON de fecha 12 de noviembre de 2023, por encontrarse los demandados incurso en la causal de nulidad contenida en el numeral 3 del artículo 275 del CPACA relativa que los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales. Así mismo se deberá verificar si los documentos electorales relativos a las mesas 1, 2, 3 y 4 ubicadas en el puesto de votación denominado Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba fueron entregados extemporáneamente al Centro de Convenciones de Montería – lugar del escrutinio- vulnerando la Resolución N° 24842 de 25 de octubre de 2023 por la cual se fijan los términos para la entrega de los documentos electorales y si ello obedeció a actos constitutivos de violencia, fuerza mayor o caso fortuito. Y de haber sido entregados de forma extemporánea si esa circunstancia afectó los registros de las mencionadas mesas, y derivó en que se configurara la causal de nulidad electoral invocada por la parte actora.

86. El 13 de junio de 2024 se realizó la audiencia de pruebas, en la que se incorporaron las pruebas decretadas y se dispuso correr traslado para alegar de conclusión por escrito.

#### **1.6. Sentencia de primera instancia**

87. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, mediante fallo del 12 de agosto de 2024, declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada tanto por la Registraduría Nacional del Estado Civil como por los concejales demandados.

88. Así mismo, declaró probadas las excepciones de «inexistencia de los hechos plasmados en la demanda y legalidad del acto administrativo», así como la de «inexistencia de la causal invocada», por lo que negó las pretensiones del medio de control.

89. Al analizar las pruebas allegadas al expediente, resaltó que una vez terminado el escrutinio por parte de los jurados de votación en las mesas 1, 2, 3 y 4



del puesto de votación del Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba, los documentos electorales fueron entregados a la delegada de la registraduría y, para el efecto, se diligenciaron los formularios E-17 tanto manual como electrónicamente.

90. Señaló que en ellos se plasmó que los documentos fueron entregados así:
- Mesa 1: A las 11:57 pm del 29 de octubre de 2023 (formulario manual) y a las 12:19 am del 30 de octubre siguiente (formulario electrónico).
  - Mesa 2: A las 9:46 pm del 29 de octubre de 2023 (formulario manual) y a las 10:12 pm del mismo día (formulario electrónico)
  - Mesa 3: A las 9:40 pm del 29 de octubre de 2023 (formulario manual) y a las 10:16 pm del mismo día (formulario electrónico)
  - Mesa 4: A las 7:08 pm del 29 de octubre de 2023 (formulario manual) y a las 10:17 pm del mismo día (formulario electrónico)
91. Mencionó que en el Formulario E-20 consta la introducción de los documentos del arca triclave a las 11:59 pm del 29 de octubre de 2023.
92. Preciso que se trató de un arca triclave auxiliar porque, para el momento en que llegaron las bolsas respectivas, no estaban presentes todos los claveros para abrir la que estaba prevista e introducir el material en ella.
93. Manifestó que en el Formulario E-19 se dejó constancia de la entrega de los sobres por parte de los delegados de puesto a los claveros el 30 de octubre a las 11:31 am.
94. Indicó que el demandante presentó reclamaciones ante la comisión escrutadora auxiliar 19, denominadas con los números 7, 8, 9 y 10, cuyo fundamento fue la extemporaneidad en la entrega de los documentos electorales en las mesas antes mencionadas.
95. Sostuvo que las reclamaciones fueron resueltas mediante las Resoluciones 5 y 6 del 6 de noviembre de 2023, en el sentido de rechazarlas por extemporáneas.
96. Añadió que la Comisión Escrutadora Municipal, a través de la Resolución 024 del 8 de noviembre siguiente, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el actor en el sentido de confirmar el rechazo.
97. Expresó que, del acta general de escrutinios del 12 de noviembre de 2023, se evidenciaba que esas mesas fueron escrutadas los días 3 y 4 de noviembre del mismo año.
98. Afirmó que el actor presentó una solicitud de saneamiento fundada en los





numerales 2 y 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, cuya solución requirió de un recuento para revisar si existía alguna diferencia entre los formularios E-14 Claveros y de Transmisión, en el que no se advirtió tal irregularidad.

99. Destacó que también obraba en el expediente la certificación del 7 de noviembre de 2023, expedida por los registradores especiales de Córdoba, en la que explicaron lo relacionado con la llegada de los pliegos al lugar de los escrutinios y la necesidad de usar un arca triclave auxiliar ante la ausencia de los miembros de las comisiones zonales.

100. Con base en el anterior estudio, explicó que la extemporaneidad de los documentos electorales constituye una causal de reclamación que trae como consecuencia la exclusión de los votos en las mesas objeto de discusión.

101. Recalcó que, no obstante, el actor presentó la reclamación respectiva de forma extemporánea, ya que las mesas en cuestión fueron escrutadas el 3 y 4 de noviembre de 2023, y su solicitud solo fue allegada hasta el 6 de noviembre siguiente, lo que justificaba su rechazo.

102. Agregó que esta decisión responde al principio de preclusión desarrollado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual las reclamaciones bajo las causales del artículo 192 del Código Electoral deben ser presentadas en el mismo momento en que se presenta la irregularidad, o en la etapa en la que se configura el supuesto de hecho de la causal, presupuestos que no se atendieron en el presente asunto.

103. Por tal motivo, consideró que no era posible abordar el análisis de este reparo, en sede del medio de control de nulidad electoral, ya que el demandante no presentó la reclamación ante la autoridad administrativa competente dentro del término previsto para el efecto.

104. Con todo, aseguró que si en gracia de discusión se estudiara la inconformidad, solo podría predicarse una presunta extemporaneidad de la entrega de los pliegos en la mesa 1, ya que se dio pasadas las 11 de la noche del 29 de octubre de 2023, es decir, luego de la hora máxima prevista en el Código Electoral.

105. Expuso que, en tal sentido, si se sustrajeran al señor Elkin Darío Ávila de Ávila los 25 votos obtenidos en esa mesa y al demandante se le retiraran los 2 que registró allí, el primero de ellos se mantendría con una votación superior si se tiene en cuenta que la diferencia entre ellos era de 62 votos, así que tampoco habría lugar a anular el acto de elección.

106. En relación con la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, referida a una presunta alteración o falsedad de los documentos electorales, se pronunció en los siguientes términos:





107. Destacó que, una vez terminado el escrutinio de mesas el 29 de octubre de 2023, el presidente del jurado de votación le entregó a la delegada de la registraduría los documentos electorales en bolsas de color verde para ser transportadas al Centro de Convenciones de Montería, de lo cual se dejó constancia de recibido en los formularios E-17 diligenciados manual y electrónicamente.

108. Argumentó que, al llegar al lugar, no se encontraba la totalidad de los claveros requeridos para introducir los pliegos en el arca triclave; lo anterior, en la medida en que ya eran más de las 12 de la noche y se había decidido retomar el escrutinio a las 9:00 am del día siguiente.

109. Expuso que, en vista de esa circunstancia, el registrador auxiliar que, además, fungía como clavero de la comisión auxiliar 19, decidió ingresarlos en un arca auxiliar a la espera de los demás claveros para el retiro y revisión de los documentos, dejando constancia en el Formulario E-19 del buen estado en el que se encontraban los sobres.

110. Adujo que, si bien esta situación particular no está regulada en el Código Electoral ni ha sido estudiada por la jurisprudencia como un caso fortuito o fuerza mayor, lo cierto es que al registrador auxiliar le correspondía garantizar la cadena de custodia del material y mantener las condiciones de los documentos entregados, lo cual efectivamente ocurrió.

111. En tal sentido, consideró que no hay prueba alguna que demuestre que ante la ausencia de los demás claveros se efectuaron actividades para alterar los documentos electorales o tergiversar la información contenida en ellos, máxime si se tiene en cuenta que, con ocasión de la solicitud de saneamiento, existió un recuento de los votos en el que no se advirtió algún tipo de manipulación.

112. Por tal razón, concluyó que no prosperaba el cargo en cuestión y aclaró que el demandante, en todo caso, no planteó dentro de su argumentación la existencia de diferencias puntuales o injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 que dieran lugar a la configuración de la causal invocada, sino que se limitó a alegar presuntas irregularidades sobre la entrega de los pliegos electorales, lo cual no estructura el supuesto previsto en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

### **1.7. Recurso de apelación**

113. Mediante escrito radicado el 23 de agosto de 2024 a través de la ventanilla virtual, la parte actora apeló la anterior decisión.

114. Advirtió que su inconformidad con la sentencia de primera instancia radicaba en tres reparos específicos:

115. En primer lugar, consideró que el tribunal no tuvo en cuenta las circunstancias que rodearon la inusual y absurda forma de incorporar los documentos electorales



de las mesas bajo controversia, asumiendo que la reclamación no fue presentada oportunamente.

116. Al respecto, argumentó que el escrutinio empieza una vez se cierra la votación, pero con base en las actas de escrutinio de las mesas que se reciban oportunamente; así mismo, que para presentar una reclamación es necesario que el hecho sobre el cual descansa la petición sea conocido por el interesado o haya llegado a manos de la respectiva comisión.

117. Sostuvo que si los documentos de las mesas 1, 2, 3 y 4 no fueron entregados oportunamente, no podía exigírsele que presentara una reclamación sobre hechos que no conocía.

118. Indicó que solo radicó la reclamación hasta que conoció el video en donde el registrador anuncia la llegada extemporánea de los pliegos, por lo que el tribunal no puede endilgarle los efectos de esa entrega inoportuna.

119. Mencionó que los documentos electorales fueron entregados en un arca auxiliar de la comisión 16 y no en la 19 que era donde correspondía, por lo que se trata de una violación al debido proceso que solo se advirtió con el anuncio realizado por el registrador ante el público y que motivó la radicación de la reclamación.

120. Precisó que, en el video, que no fue tachado de falso ni desconocido, se ve al funcionario informando a los presentes que no hubo entrega y que las bolsas fueron encontradas en el suelo.

121. Como segundo punto, aseguró que no comparte el argumento del tribunal relativo a que solo hubo entrega extemporánea de la mesa 1 del puesto 55.

122. Señaló que, por el contrario, en el video se aprecia al registrador refiriéndose en general a todas las mesas, y no solo a la número 1.

123. Cuestionó que si el material de las demás mesas fueron entregadas oportunamente al delegado de la registraduría, por qué ese funcionario no se lo dio a los claveros inmediatamente o dejó consignada alguna observación sobre el supuesto hecho de fuerza mayor.

124. En tercera medida, alegó que el *a quo* utilizó una motivación «muy pobre» al justificar las irregularidades bajo el supuesto de que esta situación no está regulada en el Código Electoral ni en la jurisprudencia como fuerza mayor o caso fortuito y que, en todo caso, la actuación del registrador velaba por el cumplimiento de la cadena de custodia.

125. Insistió en que el video aportado es claro en señalar que los pliegos se recibieron después de que se cerrara el arca triclave, sin que se haya demostrado alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que avale la entrega



extemporánea del material.

126. Aseguró que no existió ningún hecho imprevisible o imprevisto que impidiera la entrega e introducción oportuna de los pliegos para la realización del escrutinio, por lo que no podían ser tenidos en cuenta.

127. Añadió que la ley no hace distinción alguna, por lo que si los documentos no son allegados oportunamente y no se demuestra un hecho de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, no pueden ser tenidos en cuenta, así las bolsas que los contienen no presenten alteraciones, porque lo que se reprocha es el acto tardío.

128. Precisó que la apariencia de legalidad que el registrador intentó otorgar a la actuación no convalida la irregularidad, puesto que el hecho de que se haya llegado tarde al centro de convenciones no califica como una causal de exculpación.

129. Manifestó que una cosa es lo que indican los formularios y otra es lo que realmente aconteció, pues en el video aportado con la demanda se advierte que el material electoral llegó después de las 12:00 am.

130. Por lo anterior, consideró que debía revocarse la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

## **1.8. Trámite en segunda instancia**

131. Mediante auto del 16 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación, se ordenó poner a disposición de los demandados el memorial respectivo y se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

## **1.9. Alegatos de conclusión**

### **1.9.1. Parte demandada**

132. Los concejales de Montería, por conducto de sus apoderados y mediante escritos separados, pidieron confirmar la decisión apelada con base en los mismos argumentos presentados al contestar la demanda.

### **1.9.2. Parte demandante**

133. Se limitó a pedir que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en la demanda, los alegatos de conclusión de primera instancia y el recurso de apelación, con el fin de que se revoque la sentencia impugnada y se declare la nulidad del acto de elección cuestionado.



### 1.10. Concepto del Ministerio Público<sup>1</sup>

134. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación expresó que hay lugar a confirmar la decisión apelada.

135. Señaló que, contrario a lo indicado por el recurrente, tanto el momento en el que llegaron los pliegos al Centro de Convenciones de Montería (30 de octubre de 2023), como el instante en el que se adelantó el escrutinio de las mesas aludidas (3 y 4 de noviembre de 2023), tuvieron lugar con demasiada antelación a cuando se presentó la reclamación, por lo que sí se configuró el principio de preclusión.

136. Con todo, en gracia de discusión, analizó la presunta entrega extemporánea de los pliegos electorales y resaltó que la exclusión de la votación solo se predica de la entrega tardía de los documentos por parte de los presidentes de la mesa de votación al registrador o su delegado, la cual se registra en el Formulario E-17.

137. En su criterio, de las pruebas allegadas al expediente, la única mesa en la que se podría establecer una entrega extemporánea es en la número 1, ya que ocurrió después de las 11:00 pm del 29 de octubre de 2023, que era la hora máxima permitida.

138. No obstante, resaltó que si se excluyeran los votos allí obtenidos, no se modificaría el resultado de la elección.

139. En relación con el cargo de alteración o falsedad en los documentos electorales, prevista en el numeral 3 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consideró que los argumentos del actor no se encuadraban en dicha causal.

140. Explicó que la norma refiere a falsedad de los documentos ya sea en su elaboración (ideológica) o cuando una vez desarrollado y diligenciado es manipulado (material), con la intención de alterar la verdad electoral.

141. Destacó que, en cambio, lo que cuestiona el demandante es una violación de la cadena de custodia de los pliegos de las mesas bajo controversia, sin que se haya demostrado su ocurrencia.

142. Afirmó que, por el contrario, se acreditó que los documentos siempre estuvieron custodiados y fueron ingresados al arca triclave dentro del plazo establecido.

## II. CONSIDERACIONES

### 2.1. Competencia

---

<sup>1</sup> Índice 13 del expediente de segunda instancia visible en Samai.



143. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia con la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda contra el acto de elección de los concejales de Montería para el período 2024-2027, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150<sup>2</sup>, 152 numeral 7.a<sup>3</sup> del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación<sup>4</sup>.

## 2.2. El acto acusado

144. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a la elección de los concejales de para el período 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 CON del 12 de noviembre de 2023.

## 2.3. Problema jurídico

145. Con base en los argumentos presentados en el recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la sentencia del 12 de agosto de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda.

146. En tal sentido, se deberá determinar si hay lugar a estudiar de fondo el reparo relacionado con la entrega extemporánea de los pliegos electorales de las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba) de Montería o si, por el contrario, operó el principio de preclusividad respecto de las reclamaciones presentadas por el actor durante los escrutinios, que impida a la sala realizar el

---

<sup>2</sup> «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. (...) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (...)»

<sup>3</sup>«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...) 7.a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración (...)»». (Subrayado fuera del texto original)

<sup>4</sup> ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

Sección Quinta:

(...)

3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.



análisis correspondiente.

147. Para el efecto, resulta necesario examinar (i) el procedimiento de escrutinio en elecciones por voto popular, (ii) la entrega de los documentos electorales y (iii) el caso concreto.

#### **2.4. El procedimiento de escrutinio en elecciones por voto popular – Reiteración de jurisprudencia<sup>5</sup>**

148. Las garantías del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, rigen tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y electoral, como parámetro de control de legalidad de la actuación de las autoridades, en armonía con los principios que rigen la función pública, enlistados en el artículo 209 *ejusdem*, entre los cuales se destaca el de celeridad, en virtud del cual, el diseño de cualquier procedimiento para la toma de decisiones por parte de los servidores públicos debe estar estructurado a través de etapas, diferenciadas y sucesivas, que han de agotarse dentro de plazos razonables, bajo el principio de preclusividad, evitando dilaciones injustificadas y, a la vez, salvaguardando el derecho de contradicción.

149. Al respecto, esta sección ha explicado que:

[...] no comparte la idea de que pueda existir un procedimiento que no obstante tener fijadas unas etapas o fases, quede librada a la voluntad de los interesados la oportunidad en que decidan ejercer sus derechos o adelantar ciertos trámites, ya que esa posibilidad además de desquiciar la estructura lógica y consecutiva de cada procedimiento, conduciría a la incertidumbre sobre el momento en que culminaría la actuación, pues bastaría una petición formulada en una de las últimas fases para que lo actuado se retrotrajera a fases iniciales<sup>6</sup>.

150. En este marco general, el Código Electoral y la Ley 1475 de 2011 regulan el procedimiento de escrutinio que debe adelantarse para declarar una elección por voto popular, señalando cada una de sus fases, las autoridades que las dirigen, los derechos y deberes de quienes intervienen en ellas, el marco adjetivo y sustantivo de sus actuaciones, las decisiones que se deben tomar y los recursos que proceden en su contra, entre otros aspectos, que brindan seguridad jurídica para garantizar la transparencia e igualdad entre los candidatos en la contienda electoral, así como la soberanía popular expresada en el voto.

151. En este orden, es menester precisar que el procedimiento de escrutinio que

---

<sup>5</sup> La sala reitera el análisis realizado en la sentencia del 17 de octubre de 2024, radicación 17001-23-33-000-2024-00006-02, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Así mismo, consultar, entre otras, la sentencia del 29 de abril de 2021, radicación 11001-03-28-000-2018-00106-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

<sup>6</sup> Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 13 de noviembre de 2014, rad. 11001-03-28-000-2014-00046-0, MP, Alberto Yepes Barreiro





adelantan las distintas autoridades electorales se rige por los principios de preclusión, celeridad, contradicción, doble instancia, consecutividad, publicidad y transparencia, entre otros, en tanto que estas actúan como escrutadoras y, simultáneamente, como superior jerárquico de las comisiones del nivel que le precede, siendo el CNE el órgano de cierre como máxima autoridad de este procedimiento, cuya competencia es desplegada por diversas vías, según se trate de una elección del orden nacional o departamental<sup>7</sup>.

152. Ahora bien, dentro de las garantías del debido proceso, se destaca también el derecho de defensa que la legislación electoral materializa en distintos mecanismos de contradicción que proceden contra las decisiones que adoptan las autoridades electorales en las fases o etapas del procedimiento de escrutinio, para efectos de enmendar los errores en que ellas puedan incurrir y controlar la legalidad de sus actuaciones, a fin de asegurar que los resultados de los comicios se correspondan con la realidad, salvaguardando la eficacia del voto.

153. Así entonces, la legislación distingue entre las solicitudes de recuento de votos, cuyas causales específicas se encuentran consagradas en el artículo 164 del Código Electoral; las reclamaciones, que proceden bajo los supuestos establecidos en los artículos 122 y 192 *ibidem*, y las solicitudes de saneamiento de nulidades electorales, que corresponden a algunas de las hipótesis enlistadas en el artículo 275 del CPACA, mecanismos de contradicción que proceden dentro de la oportunidad y ante la autoridad correspondiente<sup>8</sup> y cuya resolución es susceptible del recurso de apelación, excepto que el acto provenga del CNE, como órgano de cierre del procedimiento de escrutinio.

154. En suma, el procedimiento escalonado y preclusivo de los escrutinios está determinado por el debido proceso, que asegura diferentes oportunidades para verificar y corregir los resultados, con base en situaciones expresamente previstas en la ley y ante las autoridades que tienen establecida la respectiva competencia.

## **2.5. Entrega de los documentos electorales para el escrutinio y sus excepciones**

155. El artículo 144 del Código Electoral regula la entrega de los documentos electorales y las excepciones previstas por el legislador para la entrega posterior al plazo legal, en los siguientes términos:

- a) Terminado el escrutinio en las mesas de votación y antes de las 11 pm, del día de las elecciones, el presidente de cada una de las mesas de votación hará entrega de las actas y documentos y formularios al delegado de la Registraduría, quien a su vez deja constancia de la fecha y hora de recibo, y de ser el caso también del estado de los sobres electorales de la correspondiente mesa de votación.

<sup>7</sup> Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 11 de marzo de 2021, rad. 11001-03-28- 000-2018-00081-00 (acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

<sup>8</sup> Artículos 122, 164 y 192 del Código Electoral.



b) Posteriormente, los pliegos electorales son entregados al clavero quien los deposita en el arca triclave con el fin de resguardar su contenido y expide una constancia de su ingreso.

c) Los pliegos que fueren entregados extemporáneamente, no serán tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho deberá denunciarse ante la autoridad competente, excepto que ante la comisión escrutadora se demuestre la existencia de actos de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, que justifiquen la tardanza.

156. En principio, solo los eventos constitutivos de violencia, fuerza mayor o caso fortuito permiten dar validez a los documentos electorales entregados de manera extemporánea, pero la jurisprudencia<sup>9</sup> ha señalado otros factores eximentes relacionados con hechos imputables al funcionario que deba recibir los documentos electorales, así:

Se consideran factores eximentes en la entrega extemporánea de los pliegos electorales las situaciones que acrediten i) violencia, ii) fuerza mayor o caso fortuito o iii) **hechos imputables al funcionario encargado de recibir los documentos electorales**. En esos casos **las comisiones escrutadoras dejarán de excluir las votaciones de las mesas que hayan sufrido alguna de estas alteraciones**.

(...)

Frente a la última causal eximente, el hecho imputable al funcionario encargado de recibir los documentos electorales, se dice que “en el marco de la relación causal, **debe acreditarse que la demora en la entrega de los pliegos electorales por los presidentes del Jurado a los Registradores o sus delegados, debe tener por causa la conducta exclusiva del funcionario encargado de recibir ese material**. (Negrilla del original).

157. Al respecto, resulta necesario reseñar que esta Sección en providencia de 9 de febrero de 2017<sup>10</sup>, precisó que:

De igual manera, esta Sala Electoral ha distinguido tres momentos específicos para la entrega de documentos electorales a la terminación del escrutinio de mesa, la Sección se refirió de la siguiente manera:

Así que, (a) a la entrega de documentos electorales del Presidente del jurado al Registrador o su delegado, le sucede (b) la entrega de éste a los claveros o a otros funcionarios electorales y luego (c) la introducción o retiro de los documentos en el arca triclave por parte de los últimos, queda constancia con la correspondiente fecha y hora<sup>11</sup>.

La distinción anteriormente expuesta es importante para determinar en qué momento

<sup>9</sup> Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de abril de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00208-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio. Reiterado en Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12 de septiembre de 2024, de radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00035-00. MP. Gloria María Gómez Montoya.

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia dictada en el Rad. 11001032800020140011200, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

<sup>11</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 26 de febrero de 2014, radicado No. 66001-23-31-000-2012-00011-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.



puede haber algún tipo de demora en la entrega de los pliegos electorales a las diferentes autoridades competentes.

(...)

[...] se tiene que el primer momento de entrega de los documentos electorales, después de realizada la votación, se registra en el formulario E-17 *recibo de documentos electorales para jurados de votación*, el segundo en el formulario E-19 *recibo de documentos electorales* y el último, en el formulario E-20 *acta de introducción de documentos electorales en el arca triclave*<sup>12</sup>.

Frente a este procedimiento electoral esta Sala<sup>13</sup> de decisión ha señalado que en caso de duda o confusión con la información plasmada en los demás formularios –E-19 y E-20–, respecto de lo consignado en el E-17, prima la información contenida en este último, en especial en lo que tiene que ver con la fecha y la hora de entrega de los documentos electorales.

El formulario E-17, en el cual se consigna el *recibo de documentos electorales entregados por los jurados de votación*, es el instrumento por medio del cual el delegado de la Registraduría recibe de los jurados de mesa los documentos electorales, una vez realizado el escrutinio de mesa.

(...)

El procedimiento de entrega de documentos electorales por los jurados de votación, conforme al Código Electoral, consiste en que el presidente de cada una de las mesas de votación diligencia el formulario E-17 y luego hace entrega de los documentos al delegado de la Registraduría, quien a su vez deja constancia de la fecha y hora de recibo y de ser el caso también del estado de los sobres electorales de la correspondiente mesa de votación. Posteriormente los pliegos electorales son entregados al clavero quien los deposita en el arca triclave con el fin de guardar su contenido y expide una constancia de su ingreso<sup>14</sup>.

De la norma que antecede se decanta la exigencia para los jurados de votación de entregar los pliegos electorales, inmediatamente después de la terminación del proceso de escrutinio y antes de las once de la noche. De la entrega se deja constancia en el formulario E-17 en el cual se debe registrar la fecha y la hora en la que se reciben los documentos por el delegado con el fin de comprobar que allegaron a tiempo, es decir antes de las once de la noche.

Sobre el particular, esta Sección ha señalado que el Formulario E-17 contiene las constancias sobre el *“recibo de documentos electorales entregados por los Jurados de Votación”*, (...) *que permite obtener información sobre el momento en que dicha entrega tuvo lugar, pues, se insiste, sólo cuando el Presidente del Jurado de Votación no entrega oportunamente los documentos electorales al Registrador o al Delegado de éste, es procedente la exclusión de dichos documentos en el escrutinio*<sup>15</sup>.

158. En ese orden, de acuerdo con el inciso final del artículo 144 del Código

<sup>12</sup> Página web, Registraduría Nacional del Estado Civil. <http://www.registraduria.gov.co/1-de-octubre-de-2011-No-56#09>.

<sup>13</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 26 de febrero de 2014, radicado No. 66001-23-31-000-2012-00011-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

<sup>14</sup> Capítulo II del Decreto 2241 de 1986 – Código Electoral.

<sup>15</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. 24 de noviembre de 2005, radicado No. 52001-23-31-000-2003-01773-01(3856), M.P. Darío Quiñones Pinilla.



Electoral, situaciones de violencia, fuerza mayor, caso fortuito o hechos imputables al funcionario encargado de recibir los documentos electorales<sup>16</sup>, justifican la llegada extemporánea de los pliegos electorales, lo que permite que los mismos sean tenidos en cuenta.

159. Por tanto, será obligación del juez electoral constatar en cada caso concreto las circunstancias particulares del escrutinio y las actuaciones que adoptaron las autoridades, con el fin de subsanar las irregularidades que pudieron surgir.

160. Sumado a lo anterior, debe tenerse en consideración que la entrega extemporánea de los documentos electorales fue prevista como causal de reclamación y, por tanto, debe proponerse en los términos del artículo 192, numeral 7, del Código Electoral, antes de acudir al juez de lo electoral, so pena de no poder abordar su análisis, en sede judicial.

## **2.6. Caso concreto**

161. Según se tiene, el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, denegó las pretensiones de la demanda por dos razones principales:

162. En primer lugar, advirtió que la reclamación realizada por el señor Tirado Solera había sido radicada de manera extemporánea y, por lo mismo, las comisiones escrutadoras rechazaron sus distintas peticiones por haber precluido la oportunidad para formular el reparo, así que el juez de lo electoral no podía efectuar un análisis de fondo sobre el particular.

163. Con todo y, en gracia de discusión, aseguró que solamente en la mesa 1 hubo una entrega extemporánea de los pliegos, pero si se excluyeran los votos allí obtenidos no cambiaría el resultado de la elección.

164. Como segunda medida, mencionó que el demandante planteó la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la alteración o falsedad de los documentos electorales.

165. Sin embargo, sostuvo que no había prueba de que el material hubiera sido alterado pues, por el contrario, se respetó la cadena de custodia de los pliegos y se realizó un recuento de los votos en el que no se encontró algún tipo de manipulación.

166. Además, precisó que el actor no alegó la existencia de diferencias puntuales o injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 que dieran lugar a la configuración de la causal, sino que se limitó a invocar irregularidades en la entrega de los pliegos, lo cual no estructura el supuesto establecido en el numeral 3 del artículo 275 *ibidem*.

---

<sup>16</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de abril de 2023, expediente 11001-03-28-000-2022-00208-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.



167. El demandante apeló la anterior decisión y, en síntesis, planteó tres reparos concretos:

168. El primero, relativo a que no pudo presentar la reclamación de manera oportuna, porque solamente se percató de la irregularidad cuando conoció del video en el que se aprecia al registrador dejando constancia sobre la entrega extemporánea de los pliegos.

169. El segundo, en el que aseguró que el video en cuestión hace referencia a la entrega tardía de los pliegos en todas las mesas del puesto 55, por lo que no es cierto que solamente se haya dado la irregularidad en la mesa número 1.

170. El tercero, en el que cuestionó que el tribunal haya avalado las irregularidades bajo el argumento de no estar reguladas por la ley o la jurisprudencia como circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y por tratarse de acciones para conservar la cadena de custodia; en su concepto, el registro videográfico es claro en establecer que el material electoral se entregó de forma extemporánea, sin que se haya dejado constancia sobre algún hecho imprevisible que impidiera la entrega e introducción oportuna de los pliegos para la realización del escrutinio.

171. Por tal motivo, señaló que si los documentos no fueron allegados oportunamente y no se demuestra alguna causal eximente, así las bolsas que los contengan no presenten alteraciones, deben ser excluidos porque lo que se cuestiona es la entrega tardía.

172. En consecuencia, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones, pues una cosa es lo que indicaban los formularios diligenciados y otra la que realmente ocurrió, ya que según el video aportado con la demanda el material electoral llegó después de las 12:00 am, es decir, fuera de la oportunidad prevista.

173. Antes de efectuar el estudio respectivo, la sala estima pertinente realizar una aclaración frente a los reparos planteados por el demandante a lo largo del proceso.

174. De acuerdo con la demanda y el recurso de apelación, es posible advertir que el actor se ha referido a la entrega extemporánea de los pliegos como causal de exclusión de la votación obtenida en las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba) de Montería.

175. Específicamente, el señor Tirado Solera siempre ha expuesto su inconformidad respecto de la entrega tardía de los pliegos a los claveros, cuya ausencia en el Centro de Convenciones de Montería impidió su incorporación en el arca triclave y motivó a que el único de los miembros presentes lo hiciera, presuntamente, en un arca auxiliar.

176. De lo anterior, la sala encuentra que en el reclamo se han combinado dos





momentos distintos de la etapa post electoral: el primero, relativo a la entrega del material por parte del presidente de los jurados al delegado de la registraduría, y el segundo, que tiene que ver con la entrega que este hace a los claveros para la introducción de los documentos en el arca triclave.

177. Dicha precisión resulta relevante ya que el actor ha sido consistente en indicar que, contrario a lo plasmado en el Formulario E-17, las pruebas allegadas al expediente demuestran que el material electoral fue entregado extemporáneamente a los referidos funcionarios.

178. Sin embargo, ese alegato está relacionado con el segundo de los momentos antes relacionados, del cual se deja registro en los formularios E-19 (recepción de documentos a funcionarios electorales) y E-20 (introducción o retiro de documentos en el arca), mas no en el E-17 como lo ha indicado a lo largo del proceso, ya que en este lo que se registra es la entrega que hacen los jurados de votación al delegado de la registraduría.

179. Realizada dicha aclaración, la sala procede a estudiar los argumentos de la apelación en los siguientes términos:

180. En primer lugar, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso<sup>17</sup> aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que la sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el recurrente.

181. De la lectura de la alzada, se advierte que las tres censuras planteadas por

---

<sup>17</sup> **ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN.** El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, **únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante**, para que el superior revoque o reforme la decisión... (Se resalta).

**ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR.** El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.





la parte actora tienen un objeto común que no es otro que demostrar que el material electoral de las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba) de Montería, fue entregado después de la hora límite prevista para el efecto, circunstancia que debió conllevar a su exclusión del escrutinio.

182. Frente al punto, esta sección comparte la postura del tribunal de primer grado en relación con la imposibilidad del juez de lo electoral de analizar de fondo el reparo relativo a la entrega extemporánea de los pliegos.

183. Como se explicó en el marco jurídico de esta providencia, el artículo 144 del Código Electoral establece que los pliegos que hayan sido entregados a los delegados del registrador del Estado Civil después de las once de la noche del día de las elecciones, salvo que se demuestre violencia, fuerza mayor o caso fortuito, no pueden ser tenidos en cuenta en el escrutinio.

184. Sin embargo, al tratarse de una causal de reclamación establecida en el artículo 192 del Código Electoral, debe ser presentada en la etapa misma del escrutinio, según lo dispone el artículo 167 de esta última codificación, so pena de que se entienda subsanada.

185. Así lo estableció esta sección en sentencia del 29 de abril de 2021:

**(...) tanto las solicitudes de recuento de votos como las reclamaciones están sometidas al principio de preclusividad** o eventualidad, de modo tal que incluso antes de estudiar la legitimidad y fundamento de aquellas, se debe constatar la oportunidad para formularlas; **normalmente se interponen en la misma etapa en que se configura el supuesto de hecho de la causal de que se trate para darle a la autoridad electoral la oportunidad de advertir y corregir su propio yerro, con garantía del derecho a la doble instancia por vía de apelación; y en caso de encontrarla precluida, se impone su rechazo por extemporánea** con el fin de dotar de certeza el cierre de cada una de las etapas del procedimiento de escrutinio –sin dilaciones por tener que volver a una fase anterior en contra del principio de celeridad que lo rige- y de la firmeza que debe revestir a las decisiones que se adoptan en su desarrollo hasta el acto definitivo de elección, **de modo tal que si no se alegan oportunamente quedan subsanadas**. Al respecto, la sentencia en cita precisa que:

**La Sala no comparte la idea de que pueda existir un procedimiento que no obstante tener fijadas unas etapas o fases, quede librada a la voluntad de los interesados la oportunidad en que decidan ejercer sus derechos o adelantar ciertos trámites, ya que esa posibilidad además de desquiciar la estructura lógica y consecutiva de cada procedimiento, conduciría a la incertidumbre sobre el momento en que culminaría la actuación, pues bastaría una petición formulada en una de las últimas fases para que lo actuado se retrotrajera a fases iniciales**<sup>18</sup>. (Se resalta)

186. Por eso, es evidente que reclamaciones como la relacionada con la entrega extemporánea de los pliegos electorales debe realizarse en la oportunidad pertinente para que pueda ser estudiada por la autoridad electoral porque, de lo

<sup>18</sup> Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, radicación 11001-03-28-000-2018-00106-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.



contrario, será rechazada por haber precluido.

187. En este caso, la presunta irregularidad debía ser alegada ante la comisión escrutadora auxiliar durante el escrutinio respectivo, el cual, según concluyó el Tribunal Administrativo de Córdoba, se realizó entre el 3 y 4 de noviembre de 2023 para las mesas 1, 2, 3 y 4 del puesto 55 (Salón Comunal Vereda Boca de la Ceiba).

188. No obstante, como lo informó el propio demandante, la reclamación solamente fue realizada hasta el 6 de noviembre de 2023, lo que motivó que la Comisión Escrutadora Auxiliar 19, mediante Resolución 6 de esa misma fecha, la rechazara por extemporánea<sup>19</sup>.

189. Por tal motivo, el *a quo* consideró que no era posible que el juez de lo electoral realizara el análisis de una presunta irregularidad que no fue alegada ante la autoridad competente en la oportunidad prevista para el efecto, en respeto del principio de preclusividad que rige el procedimiento en cuestión.

190. Ahora bien, en el primer reparo presentado en el recurso de apelación, el actor aceptó que la reclamación no fue presentada oportunamente, puesto que no conoció la anomalía sino hasta que vio el video en el que aparece el registrador informando a los asistentes sobre la recepción extemporánea de los pliegos.

191. Sin embargo, aunque el demandante afirma que solamente se percató de la irregularidad con posterioridad a su configuración, lo cierto es que esto no puede servir de excusa para desconocer el carácter preclusivo de las distintas etapas del proceso electoral.

192. Frente al punto, se recuerda que las reclamaciones deben ser presentadas en la etapa en que se configura el supuesto de hecho respectivo justamente para evitar una dilación indebida durante el escrutinio y, así, dar cierre a cada una de sus etapas.

193. Lo anterior, con el fin de que las decisiones adoptadas por la autoridad electoral adquieran firmeza y, así, evitar que se retrotraiga la actuación hasta una fase que ya ha sido superada en virtud de una petición formulada fuera de la oportunidad pertinente.

194. De ser así, se dejaría al arbitrio de los interesados la oportunidad de realizar las reclamaciones y se generaría una incertidumbre sobre la culminación de la actuación, lo cual resulta improcedente.

195. En ese sentido, al quedar en firme la actuación y tenerse por subsanada la posible irregularidad, al juez de lo electoral le estaba vedado realizar cualquier estudio de fondo sobre la posible entrega extemporánea de los pliegos, so pena de

---

<sup>19</sup> Documento visible en Samai como «06Anexo», aportado con la demanda.



desconocer el principio de preclusividad que rige la actuación, lo que justifica que el Tribunal Administrativo de Córdoba haya establecido que no debía analizarse el fondo del reclamo.

196. Además, de la lectura de la demanda, la sala advierte que el demandante nunca cuestionó la decisión adoptada por la Comisión Escrutadora Auxiliar 19 en relación con el rechazo por extemporánea de su reclamación, pues si bien la incluyó en las pretensiones del medio de control y pidió que se declarara su nulidad, no planteó ni desarrolló algún cargo específico contra el acto administrativo correspondiente; de hecho, solo se refirió a la presunta justificación al apelar el fallo de primera instancia, lo que impide realizar cualquier análisis sobre la legalidad de esa decisión.

197. Por eso, como la posible anomalía, según lo concluido por el tribunal de primer grado y aceptado por el propio recurrente, no fue alegada oportunamente, sumado a que la presunta justificación no había sido objeto de debate en el proceso, esta sección no puede adoptar una decisión distinta frente a dicho aspecto.

198. Ahora bien, el segundo punto de disenso planteado en la alzada tiene que ver con que el video aportado con la demanda demuestra claramente que los pliegos fueron entregados de forma extemporánea en todas las mesas y no solo en la primera.

199. No obstante, tal y como se dijo en precedencia, no es posible hacer un estudio en sede judicial sobre la oportunidad de la entrega de los pliegos de ninguna de esas mesas, puesto que operó el fenómeno de preclusividad al radicarse de manera extemporánea la reclamación respectiva.

200. Tampoco hay lugar a estudiar el tercer reparo formulado por el apelante, relativo a que no existió una causal de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera avalar la entrega extemporánea del material electoral, así el tribunal de primera instancia considerara que se trataba de proteger la cadena de custodia.

201. Se insiste, al tratarse de etapas preclusivas, la reclamación correspondiente debió elevarse en el momento indicado y ante la comisión escrutadora respectiva, por lo que al no haber sido así, el juez de lo electoral no puede analizar el fondo de algún tipo de reclamo relacionado con justificación o no de una posible tardanza en la entrega del material.

202. Por eso, independientemente de que el actor pretenda demostrar, a partir de un registro videográfico, que los pliegos fueron entregados fuera del límite temporal previsto para el efecto, la sala no puede realizar un estudio concreto de la posible irregularidad, ya que se desconocería el principio de preclusividad de la actuación administrativa.

203. Así pues, comoquiera que las inconformidades planteadas por el



Demandante: Janier Jadith Tirado Solera  
Demandados: Concejales de Montería para el período 2024-2027  
Rad: 23001-23-33-000-2023-00182-01

demandante en el recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad, la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **FALLA**

**PRIMERO:** Confírmase la sentencia del 12 de agosto de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión, negó las pretensiones de la demanda promovida contra el acto de elección de los concejales de Montería para el período 2024-2027.

**SEGUNDO:** Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA**  
Presidente

**LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA**  
Magistrado

**OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ**  
Magistrado

**PEDRO PABLO VANEGAS GIL**  
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en

<https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>